

La competitividad territorial peruana: ¿solución o engaño?

Alonso Rodríguez Ortega

Entender la competitividad territorial en el Perú es una tarea pendiente. En nuestro país, esta competitividad – también conocida como interna – es visiblemente desigual, debido a una serie de factores que impiden la generación de industrias diversificadas e eficientes. Entre los factores que impiden disminuir esas desigualdades podemos mencionar a aquellos relacionados con captar novas tecnologías, recursos económicos y capital humano.

Estos factores se originan en un contexto histórico, social y administrativo que debe ser descrito y analizado profundamente con el objetivo de delimitar un campo de acción específico a los actores del cambio institucional, tan necesario para la existencia un mercado interno más competitivo.

Para ampliar el entendimiento de la competitividad territorial podemos recurrir al trabajo titulado, “Al Respecto del Concepto de la Competitividad Territorial: ¿solución o engaño?”, desarrollado por el experto en economía urbana Roberto Camagni, quien describe los factores económicos y políticos que intervienen en una mayor capacidad productiva, y por lo tanto en un mayor desarrollo económico, por parte de ciertas regiones frente a otras dentro de un mismo contexto nacional.

Dicho trabajo, señala algunos lineamientos para solucionar los inconvenientes que resultan de la desigualdad económica, tecnológica e incluso cultural a nivel intranacional (es decir, entre regiones).

Estos inconvenientes surgen regularmente entre regiones que mantienen unos mismos planeamientos políticos nacionales, pero que en la realidad exhiben una notoria diferenciación en aspectos fundamentales para el digno desenvolvimiento de una vida humana.

Estos aspectos, planteados por el autor de manera teórica generalizada, sirven de interpretación para la realidad peruana, con el fin de volcar los conceptos que se postulan a un ámbito utilitario y contextualizado.

En primer lugar, Camagni evalúa las *causas de la desigualdad entre las regiones*, con el objetivo de determinar las características del sistema de producción y comercialización de una región específica.

Identificar los orígenes de la desigualdad interna entre regiones de una misma nación serviría para corregir aquellos aspectos que no hayan permitido su continuo desarrollo.

En la provincia de Cajamarca, por ejemplo, la ejecución del proyecto minero Conga significó una reacción negativa por parte de la población y las autoridades debido a una serie de principios ecológicos y políticos que defendía y promovía el Presidente Regional de dicha provincia, a razón de intereses difusamente planteados entre lo auténticamente comunitario y lo individualista.

Esta reacción negativa, por parte de la población cajamarquina, ante la instauración de una nueva empresa – dentro de un rubro que representa una de las principales actividades económicas de la región – tiene su fundamento en una tradición de vulneración ecológica, que ha devenido en resentimiento.

Este sentimiento de rechazo es un fenómeno que finalmente ha sido aprovechado de forma oportunista por las autoridades locales, no para negociar una explotación sostenible y un compromiso por parte del capital extranjero de apoyar a una progresiva industrialización local del sector, sino para generar un ambiente populista y desorganizado, que aleja a Cajamarca del flujo económico globalizado al que todas las regiones del mundo deben saber adaptarse con la mayor eficacia y el menor impacto posible sobre la vida humana y el medio ambiente.

En segundo y último lugar, Camagni rebate algunos argumentos del Premio Nobel en Economía Paul Krugman quien afirma, entre otras cosas, que no debería darse una intervención del Estado en los procesos de equilibrio de la desigualdad entre las regiones, sino que dicha desigualdad deberá nivelarse por acción del mercado, a través de subsidios internacionales o tratados de intercambio comercial, con el fin de evitar, según Krugman, una especie de “proteccionismo estatal”, en el que los gobiernos apoyan excesivamente a sus regiones.

De esta manera, para Krugman, el verdadero rol del Estado respecto a la necesidad de desarrollo e igualdad en sus regiones se desenvuelve en el plano de negociación comercial internacional. El éxito de estas empresas se mide en cuan provechoso para el país fueron los tratados comerciales generados a nivel macroeconómico, pero no se enfocan directamente en la satisfacción de las necesidades básicas de su población, sino en la adaptación de los

recursos humanos y materiales disponibles en las diversas regiones que gobierna a niveles óptimos de explotación requeridos por las grandes empresas transnacionales.

En ese sentido, es posible entender a la desigualdad interregional sólo dentro de un contexto histórico compuesto por *tres factores* que muchas veces se cruzan entre sí: (a) *la dominación*, (b) *la mala gestión pública* y (c) *la falta de una cultura del desarrollo económico*.

La dominación es el resultado de un proceso histórico en el que fuerzas externas a una comunidad la invaden a través de medios violentos, primero, y de medios psicológicos, segundo, a través de la guerra, el saqueo, la extirpación de idolatrías y la educación sumisa y descontextualizada.

En nuestro país este proceso comenzó a partir de la invasión española en tierras incas, y se desarrolló durante más de 300 años, desembocando en una República independiente de la Metrópoli, que en realidad no tenía su principal objetivo en la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos de la nueva nación, sino en la permanencia del poder económico en manos de descendientes españoles nacidos en Perú, que, rebelándose, no querían seguir dando parte de sus riquezas al lejano Rey de España.

Por su parte, *la mala gestión pública* es usualmente un rezago del proceso de dominación. Este fenómeno postcolonial reconoce su esencia en la imposibilidad de existencia de una sociedad autónoma incorrectamente gestionada previamente a la invasión, debido a la necesidad de una organización social y una distribución de roles laborales mínimamente estables y eficaces para la formación de la comunidad posteriormente alienada.

Este fenómeno comprometido con temas como corrupción de funcionarios, insuficiencia técnica para la construcción de infraestructura productiva o ineficacia administrativa para la correcta distribución de presupuesto según una priorización de las necesidades de la comunidad, no es únicamente un producto de la dominación, sino que puede ser detonado o incentivado por la *falta de una cultura orientada hacia el desarrollo económico*.

En esa línea, al abordar el tercer factor, podríamos decir que la visión de algunas culturas nativas, o descendientes nativas, no refleja necesariamente una intencionalidad mercantilista en los procesos sociales que mantienen.

Esto debido a que regiones dentro de un mismo país, en las que las costumbres ancestrales han quedado impregnadas en el desenvolvimiento consciente e inconsciente de su población, reflejan una cultura que no busca aprovecharse de los elementos tanto humanos

como naturales que la rodean, acumulando egoístamente los bienes provenientes de esa relación de dominación, sino que interpretan su posición en el mundo como una experiencia fundada alrededor de la contemplación de la belleza en la naturaleza y de la justicia en la distribución de sus bienes.

En tanto tengamos que mantener los lineamientos de este ensayo dentro de los límites del actual sistema de trazos liberales con claras limitaciones para mejorar la calidad de vida de una gran parte de la población peruana, nos quedaría sólo exponer algunas propuestas que mitiguen el impacto que una serie de políticas empresariales indeterminadas en la sostenibilidad de sus objetivos financieros pudiera tener sobre las localidades productoras de países en desarrollo.

En ese sentido, el accionar vendría principalmente de parte del sector público, a través de la promoción de la industria local, con productos de alto contenido científico y tecnológico que le permita competir tanto en el mercado local como en los diferentes mercados internacionales.

Esto implica, en primer lugar, la creación de una base de conocimiento diversificado que posteriormente provea capacidades y tecnologías necesarias para la diversificación industrial. Lo mismo que debe estar unido a un conjunto de incentivos que posibiliten esa diversificación. Cabe resaltar que los incentivos deberían de ser establecidos en coordinación directa con el sector privado, pues al final, quien tiene mayor competencia pasa saber en qué rubros se puede obtener mayor competitividad, entre las regiones, es la iniciativa privada.

Cuando esto suceda, la competitividad de la industria nacional podrá estar alineada con las exigencias de una industria del siglo XXI. En esa línea, a mediano-largo plazo, se generará una industria nacional rentable y de precios competitivos, mejorando de esa manera los sueldos y la calidad de vida de las personas.

Luego, en segundo lugar, el Estado debería identificar las potencialidades productivas de cada realidad geográfica y topográfica, para vincularlas con las cadenas de valor global. Esta tarea requiere el concurso de los diferentes agentes económico en torno de conectarse a los mercados internacionales de forma competitiva.

Otro problema que debería ser tomado en cuenta es la redistribución del presupuesto. Este se asigna a las regiones, en el caso del canon minero, por ejemplo, sin una planificación para la correcta inversión del mismo en proyectos de desarrollo, esto debido a falta de

capacitación técnica y a los altos niveles de corrupción que registran muchos gobiernos regionales.

De esa manera, el gobierno central debería en un primer momento ejecutar los proyectos siguiendo una visión profesional y acatando normativas por parte de los órganos reguladores independientes, como la Contraloría, cuya mayor participación se puede observar alrededor del gobierno central, y muy adyacentemente alrededor de los gobiernos regionales.

Posteriormente, habiendo avanzado en nivelar la competitividad interna del país, cada región podrá desarrollar sus propios planes económicos y sociales en base a una capacitación constante y en coordinación con el gobierno central, respetando la autonomía y eficacia de las regiones.

De esa forma se desarrollaría una descentralización planificada a mediano-largo plazo, y no, una improvisadamente impuesta a estructuras sociales, políticas y económicas que no están acostumbradas a la presión de los procesos económicos globalizados.

Según Camagni, la visión tradicional del proceso de desarrollo de la competitividad igualitaria entre regiones estaría amparada por la capacidad de las propias regiones para lograr buenas relaciones comerciales con las demás regiones, aprovechando sus ventajas comparativas.

El principal promotor de este punto de vista es el afamado economista estadounidense Paul Krugman, quien llama “industrias infantiles” a aquellas que siguieron una regulación estatal para lograr aquel buscado proceso de desarrollo, y no lograron hacerlo por sí mismas.

Al respecto, Camagni afirma que si bien una sobreprotección por parte del Estado es perjudicial para la autonomía administrativa de sus regiones, el origen de dicha institución es precisamente la cohesión de las diversas fuerzas dentro de un mismo espacio geográfico, y por lo tanto, tendrá el deber de levantar y orientar a aquellas industrias que demuestren estar incapacitadas para hacerlo por sí mismas.

Finalmente, presentamos un criterio que podría servir de guía para los Estados que busquen el discernimiento entre las industrias que necesiten una intervención directa y aquellas que podrían recuperarse por sí mismas a través de una oportuna participación en el mercado: sólo cuando una industria regional no ha podido desarrollarse a estándares internacionales de producción durante un largo período de tiempo, mostrándose incapacitada a nivel de

equipamiento, infraestructura y capital humano; el Estado debería intervenir para ayudar en su planificación de mediano y largo plazo.

Pero, si dicha industria regional muestra indicios de autonomía de competitividad, ella estaría capacitada para competir en el ámbito internacional, siempre que todo esto esté dentro de un contexto de estabilidad macroeconomía e política.

Se trata de un sistema que prioriza y limita el accionar estatal sobre las cadenas de producción a un nivel geográfico regional, con el fin de que dicha intervención no vulnere la libertad de empresa sino que la promueva. Siempre con el objetivo de disminuir la distancias competitivas entre las diferentes regiones.

Referencias

Camagni, R. 2002. On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?. **Urban Studies**, 39(13), 2395-2411.